

Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, compareció **(1) ELIZABETH CALDERÓN VALENZUELA**, cédula nacional de identidad N°7.221.797-7; **(2) MYRTHA ESCOBEDO VALENZUELA**, cédula nacional de identidad N°8.116.673-0, y **(3) MARÍA CRISTINA BÓRQUEZ VIAL**, cédula nacional de identidad N°6.605.598-1, todas domiciliadas para estos efectos en calle Huérfanos 669, Oficina 505, comuna de Santiago, interponiendo demanda declarativa y cobro de indemnización convencional por años de servicios, en procedimiento de aplicación general, en contra de su empleador, **VIDA TRES S.A.**, RUT N°96.502.530-8, de giro de su denominación, representada por **NICOLÁS CABELLO ETEROVIC**, ignoran profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°13.270.302-7, o por quien sus derechos represente de acuerdo al artículo 4 del Código del Trabajo, ambos con domicilio en Av. Apoquindo 3600 piso 2, comuna de Las Condes, Santiago.

Señalan que todas se desempeñaron como agentes de ventas para la demandada, en virtud de un contrato de trabajo que se encuentra vigente, y que sus remuneraciones se encontraban compuesta por montos fijos y variables.

(1) Doña Elizabeth Calderón Valenzuela: Fue contratada el 22 de mayo de 1995 y su remuneración mensual era de \$2.231.772, considerando el promedio de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.

(2) Doña Myrta Escobedo Valenzuela: Fue contratada el 1 de diciembre de 2004 y su remuneración mensual ascendía a \$6.102.107, considerando el promedio de los meses de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022.

(3) Doña María Bórquez Vidal: Fue contratada el 1 de junio de 2004 y su remuneración ascendía a \$1.581.439, considerando el promedio de los meses de marzo, abril, y junio de 2021.

Indican que los montos de sus remuneraciones son los existentes a la fecha de presentación de la presente demanda, sin perjuicio de que los montos sean actualizados en base a la remuneración mensual de los tres últimos meses completos trabajados antes de la fecha de la terminación del contrato de trabajo que corresponda, según lo que se resuelva en la sentencia definitiva.



Exponen que, en su calidad de socias afiliadas al Sindicato Interempresa de Isapre Vida Tres S.A., Banmédica y otros y Vida Tres S.A., se les aplica el contrato colectivo celebrado entre la organización sindical y su empleadora el 8 de mayo de 2020, vigente hasta el 7 de enero de 2023.

En el Título Segundo de dicho contrato, se establecen beneficios para los socios del sindicato, que como las suscritas, ejerzan el cargo de agente de ventas, y particularmente en el artículo 31 se estipuló lo siguiente: *“Indemnización Por Años de Servicios: En el caso que el contrato de trabajo termine por jubilación por invalidez, por edad legal o fallecimiento del trabajador y siempre que éste hubiere estado vigente un año o más, la empresa pagará a los trabajadores individualizados en el anexo B, una indemnización equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses prestados continuamente a la empresa, contra firma de amplio finiquito. Para estos efectos se entenderá como última remuneración mensual aquella establecida en el artículo 172 del Código del Trabajo.*

En el caso de fallecimiento del trabajador, esta indemnización se pagará sólo a la persona que ésta haya individualizado en documento escrito y firmado ante la empresa o en su defecto, al cónyuge sobreviviente, a los hijos, a los padres del trabajador o a quién certifique haber pagado efectivamente los gastos del funeral, en ese orden de prelación. Si en este orden de prelación, hubiere más de una persona, este beneficio se pagará a todos los que figuran en él, por partes iguales”.

Expresan que, dicho beneficio se ha pactado en anteriores negociaciones colectivas de su sindicato, manteniéndose sin variación alguna en varios contratos colectivos.

Sostiene que, a pesar del tenor literal de la cláusula 31° la demandada no ha reconocido el beneficio indemnizatorio a los socios del sindicato que se desempeñan como agentas de ventas y que cumplen con la edad para jubilar. Agrega que, los agentes de ventas de las empresas afiliadas al sindicato que cumplen dichos requisitos han debido demandar judicialmente para que la empresa reconozca y otorgue el beneficio.

Por ello, solicitan que se declare que tienen derecho al beneficio de la indemnización convencional por los años de servicios ya que han cumplido la edad legal de jubilación, debiendo ser condenado el demandado a pagarles el equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, prestados continuamente a la empresa, contra firma amplia de finiquito.



Señalan que, se debe otorga el beneficio indemnizatorio contenido en dicha cláusula, cuando se produzca alguno de los siguientes eventos: (a) muerte del trabajador, (b) jubilación por invalidez, o (c) por cumplimiento de edad legal para jubilarse por vejez, dado que el cumplimiento de edad legal que contiene la cláusula se refiere a la edad legal para jubilación por vejez, siempre y cuando el contrato de trabajo tenga más de un año de duración.

Agregan que, verificada alguna de las circunstancias anteriores, el pago de la indemnización debe ser otorgada, dado que no se encuentra sujeta a alguna causal de término del contrato en específico, sino a cualquiera que se origine en alguno de los supuestos que la propia cláusula señala, no existiendo requisitos adicionales para acceder al beneficio.

Por ello, indican que el tenor y el sentido de la cláusula es claro, en el sentido de que, si se verifica alguno de los eventos contemplados en la misma para acceder al beneficio indemnizatorio, se habilita al trabajador para poner término al contrato de trabajo por mutuo propio, mediante renuncia voluntaria, o bien, las partes le pueden poner término de común acuerdo, hecho lo cual, deberá pagarse al trabajador las indemnizaciones pactadas.

Expresando que, precisamente, esa es la aplicación que le ha dado la empresa al beneficio indemnizatorio pactado al contrato colectivo que les aplica, respecto de los trabajadores administrativos, que tienen el mismo beneficio en la cláusula 26 del contrato colectivo, ofreciéndole el término de contrato por mutuo acuerdo, respecto de aquellos trabajadores que accedieron a jubilarse por invalidez o cumplieron la edad legal para jubilarse por vejez, otorgándoles el beneficio indemnizatorio en el respectivo finiquito.

Así, indican que en la especie se cumplen los requisitos para acceder al beneficio, ya que (1) doña Elizabeth Calderón Valenzuela, cumplió 63 años el 4 de octubre de 2021, (2) doña Myrta Escobedo Valenzuela, cumplió 60 años el 5 de agosto de 2021, y (3) doña María Bórquez Vidal: cumplió 68 años el 8 de diciembre de 2021 y en la actualidad recibe jubilación por vejez.

Además, que han solicitado el beneficio, quedando dispuestas a otorgar el finiquito de trabajo con el pago respectivo de la indemnización por años de servicio.

Señalan que la demandada se ha negado a otorgar el beneficio a los agentes de ventas, a pesar de que otorga el mismo beneficio a los trabajadores administrativos, afectos al mismo contrato colectivo, argumentando que para impetrarlo es necesario que se verifique una causal legal de término



del contrato de trabajo, y como no lo son, la jubilación por invalidez y el cumplimiento de la edad legal para jubilarse por vejez, no es posible otorgarlo.

Sostienen que dicho argumento, desnaturaliza el beneficio indemnizatorio, al imponerle un requisito adicional que no fue pactado entre las partes y que en la práctica hace imposible su ejercicio, ya que el contrato de trabajo debe terminar por jubilación de invalidez o jubilación por vejez, circunstancias que conforme a la ley no ponen término por sí mismo al contrato de trabajo, lo que atenta contra la buena fe contractual e infringe las reglas sobre aplicación de los contratos. En relación con lo último, razonan que de conformidad con lo establecido en el artículo 1562 del Código Civil, debe preferirse aquel sentido en que una cláusula produzca efectos.

Además, sujetar la aplicación del beneficio indemnizatorio a la condición de que sea la propia empresa la que le ponga término al contrato de trabajo, significaría entregarle a la demandada una condición potestativa, es decir, aquellas que dependen de la sola voluntad del deudor para su cumplimiento, lo que infringiría el artículo 1478 del Código Civil, que declara nulas tales condiciones por ser imposibles de exigir al deudor.

Añaden que, el no otorgarles el beneficio indemnizatorio es contrario a la buena fe que impera en el cumplimiento y exigibilidad de los contratos, como dispone en artículo 1545 del Código Civil, principio que es aplicable a los contratos colectivos, ya que el artículo 303 del Código del Trabajo, ordena a las partes de una negociación colectiva de negociar de buena fe y el artículo 406 califica como práctica antisindical el incumplimiento de las estipulaciones contenidas en un instrumento colectivo.

En base a dichas circunstancias, solicitan que se declare su derecho al beneficio indemnizatorio indicado por haber cumplido la edad legal para jubilar o tener la calidad de jubiladas, y se condena a la demandada a pagarle la indemnización equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, prestados continuamente a la empresa, contra firma de finiquito amplio.

Cumpléndose todos los requisitos para hacer lugar a la acción ya que concurre la existencia de una causa de pedir, ya que la misma persigue que se declare su derecho al beneficio indemnizatorio y la negativa de la demandada a otorgárselos; asimismo concurre legitimación activa y pasiva de las partes, ya que se cumplen los requisitos expresamente estipulados en el contrato colectivo vigente que les resulta aplicable y que su empleador se niega otorgarlo, quien se encuentra legitimada para discutir u



oponerse a la pretensión hecha valer; y por último, existe un interés jurídico que esclarecer, siendo posible otorgar el petitorio de la acción deducida.

Por lo tanto, solicitan que se declare que: (1) Tienen derecho al beneficio de indemnización convencional por años de servicios señalado, en atención a que ya han cumplido la edad legal de jubilar y/o están jubiladas, siendo condenado su empleador a pagarnos dicha jubilación equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, prestados continuamente a la empresa, contra firma de amplio finiquito; (2) En consideración que el monto de su remuneración mensual los últimos tres meses completos trabajados antes de la presentación de la demandada fueron señalados, y que al momento de presentarla han cumplido los años en la empresa que se indican, el monto de la indemnización por años de servicios que nos correspondería recibir si la empresa nos reconociera el beneficio demandado a la fecha de presentación de esta demanda, serían los siguientes, sin perjuicio que dichas cantidades sea actualizadas considerando la remuneración mensual de los últimos tres meses completos trabajados antes de la fecha de terminación del contrato de trabajo y tomando en cuenta la antigüedad en la empresa que tengamos a esa fecha, por lo que solicitan que se condene a la demandada al pago de las siguientes cantidades o las que correspondan conforme a derecho y a los antecedentes del proceso: respecto de doña (a) Elizabeth Calderón Valenzuela, indemnización por 27 años equivalente a la suma \$60.257.844, (2) Myrta Escobedo Valenzuela, indemnización por 18 años equivalente a la cantidad de \$109.837.926 y (3) María Bórquez Vidal, indemnización por 17 años de servicios, equivalente a \$26.884.452. Lo anterior, con reajustes, intereses y costas.

Es necesario tener en cuenta que, a la presente causa RIT O-1720-2022, se ordenó la acumulación de la causa RIT O-1812-2022, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 449 del Código del Trabajo, de manera que presente sentencia, se redactará como si fuera una sola y única causa.

SEGUNDO: Que, compareció doña **MARIA PAZ IHNEN FRANKE** y **OMAR CORTES SANTANDER**, abogados, domiciliados para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, oficina 800, piso 8, comuna de Las Condes, en representación de la demandada **ISAPRE VIDA TRES S.A.**, domiciliada para estos efectos en Avenida Apoquindo N°3600, 2° piso, comuna de Las Condes, contestando la demanda de autos, en base a los fundamentos que se exponen a continuación.



Reconocen la existencia de la relación laboral, la fecha de inicio y las labores desarrolladas por las actoras, la existencia del contrato colectivo individualizado en el libelo, la existencia y el tenor literal del artículo 31 que se señala en la demanda, y que la jubilación por invalidez, ni por vejez son causas legales y suficientes para dar terminación al contrato.

Niegan que las actoras tengan derecho a la indemnización convencional que reclaman; que la indemnización por años de servicios no requiera como antecedente la terminación del contrato de trabajo, al contrario, es un requisito esencial que se verifique aquel para acceder al beneficio reclamado, lo que no se cumple en la especie; que las indemnizaciones y últimas remuneraciones se encuentren exentas de topes legales de conformidad con lo establecido en el artículo 172 inciso 3 del Código del Trabajo; la base de cálculo contenida en la demanda, porque aún no se ha verificado la terminación del contrato de trabajo.

Oponen excepción de inadmisibilidad de la demanda por incumplimiento de los presupuestos procesales de validez, ausencia de interés procesal, indicando que no basta con ser legitimado en cuanto a la persona y capacidad para deducirse una acción, sino que además debe verificarse un interés procesal, consistente en la necesidad de acudir a la jurisdicción para exigir la tutela de un derecho subjetivo, en la especie, de obtener la declaración del derecho al pago de indemnización convencional pactada a propósito de la terminación de la relación laboral.

Por ello, indican que el interés procesal no se agota a una mera declaración del tribunal al respecto si frente a la hipótesis planteada, la que sostienen que no ha ocurrido porque el contrato de trabajo está vigente, tiene derecho a percibir la indemnización convencional, sino que el interés procesal o *legitimatio ad causam* “exige que la parte que acciona tenga interés en que se decida por cuanto ella efectivamente es el titular o el sujeto activo o pasivo del derecho o de la relación jurídica material”.

De esta manera, si se carece de tal interés o del derecho subjetivo que lo contiene, se carece también de los derechos que se reclaman, y la consecuencia, es que no puede hacerlos valer por falta de legitimidad o interés procesal.

En la especie, explican que el interés procesal corresponde a obtener declaración del derecho al pago de la indemnización convencional de acuerdo con la cláusula 31 del Contrato Colectivo que invocan, sin embargo, las actoras carecen del derecho subjetivo, ya que no se ha configurado la



hipótesis de hecho de la cláusula que se reclama, ya que no se ha terminado el contrato de trabajo, careciendo de un derecho adquirido, teniendo una mera expectativa.

Expresan que el artículo 31 establece el supuesto de hecho necesario para del derecho que se pretende, el que corresponde a la terminación del contrato de trabajo, lo que no se cumple, y al solicitar que se declare que tienen derecho al beneficio, se modifica la intención y voluntad de las partes expresada en la referida cláusula lo que es antijurídico.

Agregan que, el propio legislador impide que una demanda sea de carácter meramente declarativa, puesto que dicha declaración se condicionada necesariamente con la existencia del derecho subjetivo del cual sea titular el actor. Además, las acciones declarativas son escasas en nuestro ordenamiento procesal, lo que se contendría en el artículo 459 N°6 del Código del Trabajo, que exigen que haya un pronunciamiento y una condena, el que no puede realizarse ya que no es parte del contenido de la declaración de mera certeza que se pretende.

Por dichas consideraciones, las actoras no se encuentran legitimadas para intentar en sede judicial laboral, acciones de mera declaración como se pretende en autos.

Además, solicitan la declaración de nulidad absoluta por objeto ilícito, ya que la jubilación por invalidez y vejez no son causales de terminación del contrato de trabajo, y siendo éstas de orden público y en consecuencia indisponibles para las partes, no pudiendo estas acordar la terminación por evento distintos de las causales legales. Incluso, encontrándose prohibida la terminación por jubilación por invalidez conforme al artículo 161 bis del Código del Trabajo.

Por dichas razones, si las partes pretenden establecer hechos no reconocidos por el legislador para dar lugar a la terminación del contrato, se trataría de un acto ineficaz, por incurrirse en un objeto ilícito en los términos contenidos en el artículo 1462 del Código Civil que establece: “*Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno (...)*”, vicio que es sancionado con la nulidad absoluta de acuerdo con el artículo 1682 de dicho cuerpo legal.

Añaden que, conforme al artículo 1683 del Código Civil el juez se encuentra en el deber de declarar la nulidad absoluta, aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el contrato.

Lo anterior, debe relacionarse con el artículo 1562 del Código del Trabajo, dado que una clausula debe preferirse en el sentido que produzca algún efecto, lo que es solo aplicable cuando se



trate de una cláusula válida, ya que de lo contrario dicha cláusula adolece de un vicio de nulidad absoluta y el pacto debe ser anulado.

Por ello, señalan que si bien, el artículo 31 del Convenio Colectivo fue suscrito de forma consensuada y en simetría contractual, adolece del vicio denunciado, ya que incorpora la jubilación por invalidez o cumplir la edad legal como causales de término de relación laboral que el legislador no reconoce, quedando vigente dicha cláusula únicamente respecto de la muerte del trabajador.

En consecuencia, solicitan que se declare la nulidad de la referida cláusula, y en particular, aquella parte donde se señala que dará derecho a las indemnizaciones por años de servicio cuando la relación laboral termine por jubilación, invalidez o cumplir la edad legal.

Expresan que a diferencia de lo que sostienen las actoras, no se trataría de un bono, sino que una indemnización convencional por años de servicios, por tanto, para que proceda es necesario que se verifique la terminación del contrato. Lo que se desprende del título de la cláusula, su contenido y por el hecho de hacer referencia al artículo 172 del Código del Trabajo, siendo claro que la indemnización por años de servicio solo es procedente ante el término de la relación laboral, oportunidad en la que se devengará el beneficio contractual, lo que es concordando con las disposiciones que regulan la materia, artículos 163, 163 bis, 168, 169, 171, 172, 173, 176 y 178, de las cuales se desprende que la indemnización por años de servicios sólo se devenga con la terminación del contrato de trabajo y se hayan prestado servicios por más de un año.

Así, al no verificarse el término del vínculo laboral, no tienen derecho las demandantes a las indemnizaciones que solicitan.

Añaden que, la naturaleza del beneficio contractual es un pacto de una indemnización convencional de perjuicios de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del artículo 163 del Código del Trabajo, el que sólo procede con la terminación del contrato de trabajo, y que la única norma que habilita la ley, para que se efectúe un pago anticipado de la indemnización por años de servicios es la indemnización a todo evento contenida en el artículo 164 del Código del Trabajo, la que no se verifica en la especie.

En subsidio de lo anterior, alegan falta de concurrencia de los presupuestos de hecho para la indemnización establecida en la cláusula 31 del contrato colectivo, ya que el vínculo laboral se mantiene vigente, reiterando que la relación laboral no puede concluir por jubilación por invalidez,



vejez o edad para jubilarse. Además, en el petitorio de la demanda no se solicita que se declare la terminación del contrato, sino que lisa y llanamente solicita las indemnizaciones sin el término de la relación laboral.

Indican que el artículo 31 del Contrato Colectivo regula una indemnización la que se devengará una vez terminada la relación laboral, la que necesariamente debe ser por mutuo acuerdo o necesidades de la empresa, ya que otorgan derecho a las indemnizaciones por años de servicios allí reguladas.

Por las razones anteriormente expuestas, indican que no es procedente el pago de la indemnización convencional, por no concurrir sus presupuestos esenciales, porque no se ha puesto término al contrato de trabajo, en particular, conforme al mutuo acuerdo.

Añaden que la jubilación por invalidez, vejez o cumplir una edad determinada para jubilar no es causal legal del término del contrato de trabajo, por tanto, su concurrencia no genera la obligación de pago de indemnización alguna, a diferencia de lo que ocurre cuando el trabajador fallece. Precisan que, ha ocurrido en otras ocasiones que las partes frente a las circunstancias mencionadas acuerdan el término del contrato de trabajo con pago de una indemnización voluntaria o una suma de dinero como indemnización voluntaria con ocasión del fallecimiento del trabajador.

Expresan que existe un desincentivo a otorgar ese tipo de indemnizaciones voluntarias y no convencionales, como las reguladas en el ya mencionado artículo 31 del contrato colectivo, ya que constituyen renta para el trabajo y rechazo tributario para la empresa, disminuyendo lo que podría percibir el trabajador (178 del Código del Trabajo) y aumento en un 40% el coste de la empresa. Por ello, señalan que el legislador laboral y tributario establecen un incentivo a la regulación de indemnizaciones convencionales, por sobre las indemnizaciones voluntarias, y por dichas razones su representada suscribieron el contrato colectivo que regula la citada cláusula, y se ha replicado una y otra vez en negociaciones colectivas anteriores, y esa ha sido la verdadera intención de los contratantes y no las conjeturas antojadizas y antijurídicas que realiza la contraria.

Así, exponen que el verdadero sentido y alcance del artículo 31 del contrato colectivo consiste en una regulación de una indemnización convencional a pagar al trabajador que goce de invalidez o jubilación por edad, y que, por este motivo, haya acordado el término de su contrato de trabajo con el empleador, siendo aplicable con la causal contenida en el artículo 159 N°1 del Código del Trabajo, esto es, el mutuo acuerdo de las partes. De lo contrario, su representada se habría obligado de forma previa



e indeterminada, a terminar los contratos de trabajo de los trabajadores socios del Sindicato que estén en alguna de las hipótesis del artículo 31 del contrato colectivo, por aplicación de la causal de mutuo acuerdo de las partes, renunciando al ejercicio de otras causales legales de término de contrato que puedan concurrir en cada caso, y por tanto, se había negociado sobre las facultades de dirección del empleador, cuestión que no puede ser objeto de negociación colectiva de conformidad con el artículo 306 del Código del Trabajo.

Indican que la interpretación que realizan las demandantes de la cláusula en relación con el artículo 1562 del Código Civil, reafirman sus alegaciones, ya que para la procedencia del pago de la indemnización convencional es necesario la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo de las partes. Producido ese hecho, procede el pago de la indemnización pactada, no siendo efectivo que la cláusula no produzca efecto alguno.

Por último, sostienen que no puede considerarse la última remuneración mensual de las trabajadoras para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, ya que dicha disposición expresa que el cálculo debe realizarse en los meses que precedan de la terminación del contrato de trabajo, el que no se ha verificado, y establece el límite de las 90 UF, el que resulta plenamente aplicable.

Por lo tanto, solicitan el completo rechazo de la demanda, con condena en costas.

TERCERO: Que, en audiencias preparatorias realizadas el 3 y 6 de mayo de 2022, la parte demandante evacuó el traslado de la excepción de falta de interés procesal opuesta por la demandada, indicando respectivamente, que entiende que se trata de una alegación de fondo, de manera que deberá estarse al mérito de las alegaciones del fondo para resolver si existe o no existe esta falta de interés procesal en los términos que están denunciados en la contestación, y que se trata de una excepción atípica que no está en nuestro ordenamiento jurídico ni es de aquellas de especial pronunciamiento, no es dilatoria, de manera que claramente es una alegación de fondo, pero que formalmente se alega como excepción, y a lo que alude es que se tengan que cumplir aquellos requisitos procesales que son propios para una solicitud de demanda declarativa como en la especie, en la demanda se indican claramente que se reúnen todos y cada uno de esos requisitos, que los requisitos procesales están satisfechos, solicitando al Tribunal que deje su resolución para definitiva.

CUARTO: Que, llamadas las partes a conciliación, esta no prosperó.



Además, las partes arribaron a la siguiente convención probatoria: La existencia de la relación laboral entre las demandantes y la demandada. Respecto de doña Elizabeth Angélica Calderón Valenzuela, fecha de contratación 22 de mayo de 1995, funciones Agente de Ventas. Respecto de doña Myrtha Lynda Escobedo Valenzuela, fecha de contratación 01 de diciembre del 2004, funciones Agente de Ventas.

Asimismo, respecto de la demandante doña María Bórquez Vidal se fijaron los siguientes hechos no controvertidos: 1) Fecha inicio relación laboral; 2) Funciones realizadas por el trabajador; 3) Existencia convenio colectivo.

Por último, se fijaron como hechos a probar los siguientes: 1) Hechos o antecedentes que darían cuanta de la procedencia de las indemnizaciones a que pueda acceder la demandante; 2) Términos o estipulaciones del contrato colectivo, particularmente cláusula décimo primera. En su caso, hechos o antecedentes que darían cuenta de algún vicio que hiciera anularla; y 3) Estipulaciones de la relación entre la demandante y la demandada, remuneraciones pactadas y efectivamente percibidas para efectos de base de cálculo de las eventuales indemnizaciones.

QUINTO: Que, para acreditar sus pretensiones la **parte demandante** incorporó y rindió los siguientes medios de prueba:

- **Documental:**

A) Respecto de doña Elizabeth Calderón Valenzuela:

- 1) Certificado de nacimiento de la actora.
- 2) Certificado de compañía de seguros de vida PENTA S.A. a nombre de la actora de fecha 09 de marzo de 2022, que acredita que recibe Renta Vitalicia por vejez desde 1 diciembre de 2018.
- 3) Liquidaciones de la actora correspondientes a octubre, noviembre y diciembre 2021 y enero, febrero y marzo 2022.
- 4) Copia de correo electrónico enviado por la actora a KLAUS PETER SCHEEL SCHULZ de fecha 9 de marzo de 2022, solicitando jubilación por años de servicios, y respuesta de MARIA PINEDA SEGUNDO de 10 de marzo de 2022, rechazando solicitud.

B) Respecto de doña Myrta Escobedo Valenzuela:

- 5) Certificado de nacimiento de la actora.
- 6) Liquidaciones de la actora correspondientes a diciembre 2021 y enero, febrero y marzo 2022.



- 7) Copia de correo electrónico enviado por la actora a VIVIANA DÍAZ de fecha 21 de febrero de 2022, solicitando jubilación por años de servicios, y respuesta de María Pineda segundo de 1 de marzo de 2022, rechazando solicitud.

C) Respecto de doña María Cristina Bórquez Vidal:

- 8) Certificado de nacimiento de la actora.
- 9) Certificado de compañía de seguros de vida PENTA S.A. a nombre de la actora de fecha 22 de febrero de 2022, que acredita que recibe renta vitalicia por vejez desde 1 agosto de 2017.
- 10) Liquidaciones de la actora correspondientes a marzo, abril y junio 2021.
- 11) Copia de correo electrónico enviado por la actora a ANDRÉS ALESSANDRI y MARIA PINEDO SEGUNDO de fecha 18 de marzo de 2022, solicitando jubilación por años de servicios, y respuesta de MARIA PINEDA SEGUNDO de 21 de marzo de 2022, rechazando solicitud.

D) Respecto de las tres demandantes:

- 12) Copia de contrato colectivo de trabajo de fecha 07 de noviembre de 2017, celebrado entre Vida Tres S.A. y Sindicato Interempresa de Isapre Vida Tres S.A., Banmédica y Otros, con nómina de trabajadores afectos al mismo.
 - 13) Copia de contrato colectivo de trabajo de fecha 8 de mayo de 2020, celebrado entre Vida Tres S.A. y Sindicato Interempresa de Isapre Vida Tres S.A., Banmédica y Otros, con nómina de trabajadores afectos al mismo.
- **Testimonial:** Prestó declaración doña Erika Rivera Espinoza, según consta en el registro de audio.
 - **Exhibición de documentos:** Por último, solicitó a la demandada exhibir las liquidaciones de doña María Bórquez Vidal desde marzo 2021 a abril 2022. Diligencia que se tuvo por cumplida.

□**SEXTO:** Que, para acreditar sus alegaciones y defensas la **parte demandada** ofreció e incorporó la siguiente prueba:

- **Documental:**

A) Respecto de doña Elizabeth Calderón Valenzuela:

- 1) Copia de Contrato de trabajo suscrito entre doña Elizabeth Calderón Valenzuela e Isapre Vida Tres S.A. con fecha 22 de mayo de 1995.



- 2) Copia de Contrato de trabajo suscrito entre doña Elizabeth Calderón Valenzuela e Isapre Vida Tres S.A. con fecha 01 de febrero de 2016, más anexo N°2, N°3, N°4 y N°5, todos de igual fecha.
- 3) Copia anexo de contrato de doña Elizabeth Calderón Valenzuela de fecha 1 de julio de 2020.
- 4) Copia de liquidaciones de remuneraciones de doña Elizabeth Calderón Valenzuela del período de enero de 2020 a marzo de 2022.

B) Respecto de doña Myrta Escobedo Valenzuela:

- 5) Copia de Contrato de trabajo suscrito entre doña Myrtha Lynda Escobedo Valenzuela e Isapre Vida Tres S.A. con fecha 01 de diciembre de 2004.
- 6) Copia anexo de contrato de doña Myrtha Lynda Escobedo Valenzuela de fecha 01 de marzo de 2017 y de 01 de julio de 2020.
- 7) Copia de liquidaciones de remuneraciones de doña Myrtha Lynda Escobedo Valenzuela del período de marzo de 2020 a marzo de 2022.

C) Respecto de doña María Cristina Bórquez Vidal:

- 8) Copia de Contrato de trabajo suscrito entre doña María Cristina Bórquez Vial e Isapre Vida Tres S.A. con fecha 01 de junio de 2005.
- 9) Copia anexo de contrato de doña María Cristina Bórquez Vial de fecha 01 de marzo de 2017, 01 de diciembre de 2019.
- 10) Copia de liquidaciones de remuneraciones de doña María Cristina Bórquez Vial del período de marzo de 2020 a marzo de 2022.

D) Respecto de las tres demandantes:

- 11) Copia de contrato colectivo suscrito entre Vida Tres S.A. y el Sindicato Interempresas de Isapre Vida Tres S.A., Banmédica S.A. y Otros, vigencia mayo 2020 – febrero 2023.
- **Confesional:** Absolvió posiciones las demandantes de autos, doña **Elizabeth Calderón Valenzuela**, doña **María Cristina Bórquez** y doña **Myrtha Escobedo Valenzuela**, según consta en el registro de audio.
 - **Testimonial:** Por último, prestó declaración doña **María Pineda Segundo**, según consta en el registro de audio.



SÉPTIMO: Que, apreciadas las pruebas incorporadas conforme a las reglas de la sana crítica, considerando especialmente su gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por los intervinientes al proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa:

□A) Respetto de doña Elizabeth Calderón Valenzuela:

□1) Que la actora comenzó a prestar servicios para la demandada el 22 de mayo de 1995, desempeñando las funciones de agente de ventas, manteniéndose vigente la relación laboral; hecho que fue objeto de una convención probatoria entre las partes y es corroborado por el contrato de trabajo de dicha fecha suscrito por ambas partes y anexo de fecha 1 de febrero de 2015 en el cual se describe su cargo, incorporados por la demandada.

□2) Que la trabajadora nació el 4 de octubre de 1958, teniendo 63 años a la fecha de presentación de la demanda; hecho que se tiene por establecido en virtud del certificado de nacimiento de la actora incorporado por la parte demandante.

□3) Que la actora se encuentra pensionada por vejez desde el 1 de diciembre de 2018; hecho que se tiene acreditado en virtud del certificado emitido por la compañía Penta Vida, incorporado por la demandante.

4) Que la trabajadora el 4 de marzo de 2022 solicitó el beneficio contenido en el contrato colectivo de pago de indemnización por años de servicios por cumplir la edad de jubilación, respondiendo la demandada el 10 de marzo que *“el ser jubilada no es causal de termino de contrato, por lo cual no es posible otorgar lo que señala”*; hecho que se tiene por establecido en virtud de los correos electrónicos intercambiados entre la actora y doña María Pineda de Isapre Banmédica.

B) Respetto de doña Myrta Escobedo Valenzuela:

5) Que la actora comenzó a prestar servicios para la demandada el 1 de diciembre de 2004, desempeñando las funciones de agente de ventas, manteniendo vigente la relación laboral; hecho que fue objeto de una convención probatoria entre las partes y es corroborado por el contrato de trabajo de dicha fecha suscrito por ambas partes, incorporado por la demandada.

□6) Que la trabajadora nació el 5 de agosto de 1961, teniendo 60 años a la fecha de presentación de la demanda; hecho que se tiene por establecido en virtud del certificado de nacimiento de la actora incorporado por la parte demandante.



□7) Que la trabajadora el 21 de febrero de 2022 solicitó acogerse al beneficio contenido en el contrato colectivo de pago de indemnización por años de servicios por cumplir la edad de jubilación, respondiendo la demandada el 1 de marzo que “*el ser pensionada no es causal de termino de contrato, por lo cual no es posible otorgar lo que solicita*”; hecho que se tiene por establecido en virtud de los correos electrónicos intercambiados entre la actora y doña María Pineda de Isapre Banmédica.

C) Respecto de doña María Cristina Bórquez Vidal:

8) Que la actora comenzó a prestar servicios para la demandada el 1 de junio de 2005, desempeñando las funciones de agente de ventas, manteniendo una relación laboral vigente; hecho que no fue controvertido entre las partes y es corroborado por el contrato de trabajo de dicha fecha suscrito por ambas partes, incorporado por la demandada.

□9) Que la trabajadora nació el 8 de diciembre de 1953, teniendo 68 años a la fecha de presentación de la demanda; hecho que se tiene por establecido en virtud del certificado de nacimiento de la actora incorporado por la parte demandante.

□10) Que la actora se encuentra pensionada por vejez desde el 1 de agosto de 2017; hecho que se tiene acreditado en virtud del certificado emitido por la compañía Penta Vida, incorporado por la demandante.

11) Que la trabajadora el 18 de marzo de 2022 solicitó el beneficio contenido en el contrato colectivo de pago de indemnización por años de servicios por cumplir la edad de jubilación, respondiendo la demandada el 21 de marzo que “*el hecho de haber cumplido edad de jubilación no es causal de termino de contrato de trabajo, por lo cual no es posible otorgar lo que solicita*”; hecho que se tiene por establecido en virtud de los correos electrónicos intercambiados entre la actora y doña María Pineda de Isapre Banmédica.

D) Respecto de todas las demandadas:

12) Que el 8 de mayo de 2020 la demandada y el Sindicato Interempresas de Isapre Vida Tres S.A., Banmédica S.A. y Otros celebraron (en adelante el “Sindicato”) un contrato colectivo, cuya vigencia se extiende desde el 8 de mayo de 2020 hasta el 7 febrero de 2023 (en adelante el “Convenio Colectivo”), el que en su artículo 31 contiene la cláusula objeto de la controversia de autos; hecho que no ha sido controvertido entre las partes y consta en el referido instrumento colectivo incorporado por ambas al juicio.



□13) Que las tres demandantes de autos se encuentran afiliadas referido Sindicato y figuran en la nómina de trabajadores afectos al Convenio Colectivo indicado en el punto anterior, particularmente en el “*Anexo B: Trabajadores Área Comercial*” (N°9, 11 y 21); hecho que se tiene por acreditado en virtud del referido convenio colectivo incorporado por ambas partes al juicio, y de todas las liquidaciones de remuneraciones de las actoras incorporadas por ambas partes al juicio, y también exhibidas por la demanda respecto de doña María Cristina Bórquez, en que consta el pago de la cuota sindical por concepto de “Cuota Sindicato Interempresa”.

OCTAVO: Que, establecidos los hechos de la causa, corresponde pronunciarse respecto de la excepción de falta de interés procesal deducida por la demandada.

Dicha excepción se funda en el hecho de que las demandantes carecerían de interés procesal o legitimación activa, dado que no serían titulares o sujetos activos del derecho subjetivo o la relación jurídica material que reclaman, al no configurarse la hipótesis contenida en el artículo 31 del Contrato Colectivo para declarar su derecho al pago de la indemnización contemplada en dicha cláusula, ya que no se ha terminado el contrato de trabajo. Lo anterior, además, encontraría sustento en la naturaleza de la acción deducida, ya que al tratarse de una declarativa de mera certeza se requiere que quien accione este presumido de interés procesal, agregando que de conformidad con lo establecido en el artículo 459 N°6 del Código del Trabajo en la sentencia necesariamente debe haber un pronunciamiento y una condena, lo que no se podría realizar ya que no es parte del contenido de la declaración de mera certeza que se pretende.

Al respecto, tal como consta en el motivo anterior, las tres demandantes mantienen una relación laboral vigente con la demandada, existe el Convenio Colectivo al que aluden en su demanda y les resulta aplicable, por tanto, indudablemente detentan interés procesal o son legitimadas activas de la presente acción.

Lo anterior, por cuanto la acción deducida pretende que este Tribunal determine el verdadero sentido y alcance del artículo 31 del Convenio Colectivo, y conforme a ello, se declare que a las actoras tienen el derecho a obtener la indemnización contemplada en dicha cláusula, en los términos establecidos en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo que dispone: “*Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de*



las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

Es decir, las demandantes al detentar la calidad de trabajadoras y al encontrarse afectas al Contrato Colectivo, son legítimas contradictoras de la presente acción, dado que las posiciona o relaciona con el objeto del juicio, el que consiste en determinar si le es aplicable o no la cláusula 31 del referido instrumento.

Por lo demás, los argumentos esgrimidos por la demandada para fundar dicha excepción dicen relación con la improcedencia de la aplicación de la cláusula 31 del Contrato Colectivo a las actoras, por no configurarse las hipótesis de hecho contenida en dicha disposición al no haberse terminado la relación laboral, cuestión de fondo que no se vincula con la excepción deducida, dado que no apunta a la relación que tienen las demandantes con la situación jurídica sustancial que deducen en autos, sino con la resolución de la controversia misma, ya que el Tribunal debe determinar si resulta aplicable dicha disposición a las trabajadoras.

Por otro lado, la demandada indica que al tratarse de una acción declarativa de mera certeza no podría darse aplicación a lo establecido en el artículo 459 N°6 del Código del Trabajo, obviando el claro tenor literal de dicha disposición, la que establece que el pronunciamiento del Tribunal respecto de las sumas que ordene pagar o las bases necesarias para su liquidación se efectuará “*si ello fuera procedente*”, incluyéndose así las acciones declarativas de mera certeza.

Sin embargo, a diferencia de lo alegado por la demandada, relativo que en la presente causa no podría haber un pronunciamiento y una condena, porque no es parte de la declaración de mera certeza que se pretende, aquello si es posible, ya que tal como se desprende de la parte petitoria del libelo, la acción pretende la declaración de un derecho y también la condena de la demandada al pago del beneficio contemplado en el artículo 31 del Convenio Colectivo -derivada del reconocimiento del derecho solicitado-.

Por dichas consideraciones, será completamente desestimada la excepción de falta de interés procesal deducida por la demandada.

NOVENO: Que, resuelta la excepción corresponde pronunciarse sobre el fondo del asunto, determinando el verdadero sentido y alcance del artículo 31 del Convenio Colectivo vigente al que se encuentran adscritas las actoras, con el objeto de establecer, en primer lugar, si dicha disposición



contiene una causal “nueva” de terminación del contrato de trabajo; y, en segundo lugar, y en caso de que se deseche lo anterior, cuáles son los requisitos para acceder al beneficio contenido en dicha disposición, y conforme a ello, si la misma resulta aplicable o no a las trabajadoras en cuestión.

□Lo anterior, por cuanto todas las alegaciones de la demandada se centran y convergen en único argumento central, consistente en el término de la relación laboral.

□En efecto, la demandada solicita que se declare la nulidad absoluta de la misma por objeto ilícito, debido a que introduciría nuevas causales de terminación del contrato de trabajo, correspondientes a la jubilación por invalidez y vejez, lo que se encontraría absolutamente vedado por el legislador, ya que aquellas son normas de orden público y completamente indisponibles para las partes, razón por la cual, se encuentran expresamente reguladas en los artículos 159, 160, 161 del Código del Trabajo, lo que abonaría el hecho de que se prohíbe la terminación del contrato de trabajo por causa de invalidez total o parcial en los términos indicados en el artículo 161 bis de dicho cuerpo legal. Quedando vigente únicamente la disposición frente al evento de muerte del trabajador, la que sí constituiría una causal de terminación expresamente autorizada por la ley.

□Así, dicha cláusula sería contraria al orden público chileno, configurándose el vicio de nulidad absoluta por objeto ilícito contenido en el artículo 1462 del Código Civil, y, por tanto, el artículo 31 del Convenio Colectivo debe ser anulado.

□En subsidio de lo anterior, argumenta que las demandantes no cumplen con los requisitos para acceder al beneficio contemplado en la cláusula, porque mantienen un vínculo laboral vigente, siendo necesario para acceder al mismo que se ponga término al contrato de trabajo, siendo ese el verdadero sentido y alcance de la norma en cuestión.

□**DÉCIMO:** Que, el artículo 31 se encuentra contenido en el Convenio Colectivo, particularmente en el Título Segundo, Letra B “*Condiciones comunes (salvo la excepción para algún cargo que haga alguna cláusula determinada) para trabajadores que revisten el carácter de agentes de ventas o recaudador con remuneración variable, individualizados en el Anexo B*”, señalando lo siguiente: “Artículo N°31; Indemnización Por Años de Servicios:

□*En el caso que el contrato de trabajo termine por jubilación por invalidez, por edad legal o fallecimiento del trabajador y siempre que éste hubiere estado vigente un año o más, la empresa pagará a los trabajadores individualizados en el anexo B, una indemnización equivalente a 30 días de*



la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses prestados continuamente a la empresa, contra firma de amplio finiquito. Para estos efectos se entenderá como última remuneración mensual aquella establecida en el artículo 172 del Código del Trabajo.

En el caso de fallecimiento del trabajador, esta indemnización se pagará sólo a la persona que ésta haya individualizado en documento escrito y firmado ante la empresa o en su defecto, al cónyuge sobreviviente, a los hijos, a los padres del trabajador o a quién certifique haber pagado efectivamente los gastos del funeral, en ese orden de prelación. Si en este orden de prelación, hubiere más de una persona, este beneficio se pagará a todos los que figuran en él, por partes iguales”.

□ Como se puede apreciar de su título y contenido, se desprende claramente que en dicha disposición las partes regularon una indemnización convencional por años de servicios, ya que el beneficio consiste en otorgar al trabajador una indemnización equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses, requiriéndose que el contrato de trabajo esté vigente por más de año.

□ En efecto, la referida cláusula emplea -exactamente- los mismos términos utilizados por el legislador para regular la indemnización legal por años de servicios contenida en el artículo 163 inciso 2 del Código del Trabajo, con la salvedad que no se refiere al límite legal contemplado en dicha norma.

□ Además, indica que la remuneración mensual se calculará de la forma establecida en el artículo 172 del Código del Trabajo, fórmula establecida precisamente para calcular la indemnización por años de servicios legal o convencional, contenida en los incisos segundo y primero, respectivamente del artículo 163 de dicho cuerpo legal.

□ En consecuencia, como se puede apreciar, las partes pactaron una indemnización convencional por años de servicios, cuestión que se encuentra expresamente autorizada según se desprende del artículo 163 inciso primero y 178 del Código del Trabajo.

□ Por tanto, dicha cláusula regula los requisitos necesarios para hacer lugar a dicha indemnización, correspondientes a jubilación por invalidez, por edad o muerte del trabajador, siempre que el contrato de trabajo hubiera estado vigente un año o más, y que los trabajadores se encuentran individualizados en el Anexo B, no existiendo ningún otro requisito para acceder al beneficio.



□ Dicha interpretación, por lo demás resulta coherente con la naturaleza del contrato celebrado entre las partes en los términos establecidos en el artículo 1563 del Código Civil, ya que se encuentra incorporado en un instrumento colectivo, en que las partes de la convención, empleador y trabajadores, regularon beneficios en especie o evaluables en dinero, consistente en una indemnización convencional por años de servicios, conforme a lo preceptuado en los artículos 320 y 321 N°2, lo que, además, es una de las materias que -precisamente- pueden ser objeto de una negociación colectiva en los términos indicados en el artículo 306 del Código del Trabajo.

□ Así, la indemnización convencional por años de servicios no se trata de una regulación que atente contra el orden público chileno, y tampoco afecta las facultades del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa según lo indicado en el inciso 4 del artículo 306 del Código del Trabajo, ya que se trata de un beneficio en dinero, materia sobre la cual, la ley autoriza expresamente a los contratantes regular en un instrumento colectivo.

□ Por otro lado, es la propia demandada quién expresa el motivo del por qué se regula una indemnización convencional en un contrato colectivo, y por qué la misma resulta beneficiosa a ambas partes, al expresar: *“(...) si frente a las hipótesis planteadas -invalidéz, jubilación o fallecimiento- se establece una indemnización convencional, y ésta se encuentra pactada en el contrato colectivo, conforme lo dispone el artículo 178 del Código del Trabajo, el monto pagado por indemnización convencional no constituirá renta para el trabajador y por ende, se exime del impuesto a la renta; y por otra, será un gasto tributario aceptado para la empresa, y no deberá pagar el 40% del valor del a indemnización como impuesto al gasto rechazado”*.

□ Además, cabe hacer presente que la testigo doña Erika Rivera, ejecutiva de ventas de la demandada desde diciembre de 1992, y quien ejerce un cargo directivo en el Sindicato desde 1994, y participó en la redacción del Convenio Colectivo, indicó que dicha cláusula existe desde que se inició el Sindicato y el Convenio Colectivo desde 1993, y que la misma se mantuvo y se mantiene.

□ Asimismo, es posible constatar que dicha cláusula se encuentra incorporada en exactamente los mismos términos y en el artículo 31 del Contrato Colectivo de Trabajo de 7 de noviembre de 2017, suscrito entre la demandada y el Sindicato, cuya vigencia se extendió desde aquella fecha hasta el 7 de mayo de 2020, es decir, en el instrumento colectivo inmediatamente anterior al que se analiza en autos.



□ Por último, en iguales términos que los expresados en el Convenio Colectivo en análisis, dicha cláusula se incorporó en los anexos de contrato de doña Myrtha Escobedo y de doña María Cristina Bórquez de fecha 1 de marzo de 2017, particularmente en la cláusula cuarta dicho documento.

□ Como se puede apreciar, el beneficio indemnizatorio contenido en el artículo 31 del Convenio Colectivo, ha sido una práctica asentada por las partes, a lo largo de los años, no tratándose de una disposición nueva ni aislada, la que se ha mantenido y expresado en los diversos instrumentos colectivos durante la relación que ha existido entre las partes.

□ Además, doña Erika Rivera indicó que el beneficio se otorga a todos los trabajadores administrativos, y particularmente, se otorgó a doña Ivonne Abarzúa, Patricia Poblete y doña Ana Vega, todas dirigentes sindicales. Lo anterior, es corroborado por Anexo A-1: Trabajadores Stop Loss Área Administrativa” del Convenio Colectivo, en que se individualizan a dichas trabajadoras bajo el N°1, 16 y 18.

□ Al respecto, cabe hacer presente en este punto que, si bien, dichas trabajadoras no son agentes de ventas, y, por tanto, no les resulta aplicable la cláusula análisis, regulándose por las estipulaciones contenidas en el Título Primero del Convenio Colectivo. En dicho aparatado, particularmente en el artículo 26 se aprecia una cláusula idéntica a la contenida en el artículo 31, la que señala: “*Artículo N°26; Indemnización por años de servicios:*

En la situación de las trabajadoras Sra. Paulina Marchant Herrera y Sra. Leonor Álvarez Bravo Álvarez Bravo y en el caso que el contrato de trabajo termine por jubilación por invalidez, por edad, legal o fallecimiento de la trabajadora y siempre que éste hubiere estado vigente un año o más, la empresa pagará a los trabajadores individualizados en el anexo B, una indemnización equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses prestados continuamente a la empresa, contra firma de amplio finiquito. Para estos efectos se entenderá como última remuneración mensual aquella establecida en el artículo 172 del Código del Trabajo.

En el caso de fallecimiento de la trabajadora, esta indemnización se pagará sólo a la persona que ésta haya individualizado en documento escrito y firmado ante la empresa o en su defecto, al cónyuge sobreviviente, a los hijos, a los padres del trabajadora o a quién certifique haber pagado efectivamente los gastos del funeral, en ese orden de prelación. Si en este orden de prelación, hubiere más de una persona, este beneficio se pagará a todos los que figuran en él, por partes iguales”.



□ Si bien, la testigo doña María Pineda, jefa de compensaciones, remuneraciones y beneficios de contratos colectivos y extensiones de los mismos, indicó que la cláusula no se aplica para los trabajadores administrativos porque se estipuló solamente para las personas mencionadas en dicha cláusula, y que desconoce si la empresa llegó a algún acuerdo con trabajadores de esta área, lo que se trataría de un mutuo acuerdo, y no un pago por contrato colectivo.

□ Sin embargo, como se aprecia de la cláusula citada, si bien se individualiza concretamente a dos personas, luego expresa la locución “y”, es decir, incluyendo o agregando a las personas que cumplan los requisitos indicados en la norma, jubilación por invalidez, edad legal o fallecimiento del trabajador. Así, esta sentenciadora no comparte la interpretación de dicha cláusula efectuada por la testigo.

□ Por tanto, es posible sostener que un beneficio indemnizatorio idéntico ha sido aplicado por la empresa a trabajadores del área administrativa, cláusula que tiene exactamente el mismo contenido que el estipulado en el artículo 31.

□ Por último, cabe agregar que, doña Erika indicó que la separación entre trabajadores administrativos y agentes de ventas en el Convenio Colectivo, se debió a una propuesta de la empresa, ya que tienen diferentes rentas, reajustes y bonos de colación y movilización, para tener más claro la situación de ambas áreas. Además, que la empresa se niega a dar el beneficio indemnizatorio a los agentes de ventas por condiciones económicas, dado que tienen una remuneración más alta, sosteniendo el sindicato que ello es una discriminación. Es decir, la empresa no otorga el beneficio por un argumento económico y no porque la cláusula establece una supuesta causal de terminación del contrato de trabajo.

□ Por dichas consideraciones, no es posible sostener, que el artículo 31 del Convenio Colectivo regula causales de terminación del contrato, ya que obviamente -y tal como lo señala la demandada-, aquello se encuentra absolutamente vedado por nuestro legislador, por tratarse de normas de orden público las que son indisponibles para las partes.

□ Sostener aquello, implicaría que dicha cláusula no tendría ninguna aplicación práctica, en caso de que un trabajador se jubile por invalidez o por edad legal, siendo una letra muerta, lo que resulta contrario al sentido en que deben interpretarse una cláusula contractual conforme al artículo 1562 del Código Civil.

□ Además, darle la interpretación que pretende la demandada, en el sentido de que dicha cláusula no establece un beneficio indemnizatorio, sino que causales de terminación del contrato de trabajo,



atentaría contra la naturaleza misma del contrato que celebraron las partes -en los términos indicados en los artículos 306 y 320-, y la buena fe, principio que debe regir imperativamente en la negociación colectiva según lo previene el artículo 303 del Código del Trabajo y en todo contrato legalmente celebrado entre las partes conforme al artículo 1546 del Código del Trabajo, al tratarse -tal como expresa ésta- de una cláusula consensuada “*entre la empresa y el sindicato, en condiciones de simetría contractual*”.

□Es más, aquello supondría un completo desconocimiento o ignorancia de la legislación laboral por parte de la demandada, lo que no resulta posible a la luz de lo establecido en el artículo 8 del Código Civil, ya que las únicas causales de término de la relación laboral -tal como sostiene la demandada- son las indicadas en los artículos 159, 160, 161, 161 bis y 163 bis del Código del Trabajo.

□**UNDÉCIMO:** Que, por dichas consideraciones, es posible concluir que el artículo 31 del Convenio Colectivo regula los requisitos para acceder a una indemnización convencional por años de servicios, siendo ese, su verdadero sentido y alcance.

□Razón por la cual, se desestimaré completamente la alegación de la demanda respecto de declarar la nulidad absoluta de la cláusula por objeto ilícito, no sólo porque aquella no es la correcta interpretación de la cláusula, sino, porque además, estimar que contempla causales de terminación del contrato de trabajo distintas de las establecidas en la ley, implicaría que la empresa, quien concurrió con su voluntad a suscribir el Convenio Colectivo -no sólo en este, sino que en todos los anteriores que contenían la cláusula, y en los anexos de contratos individuales en que se incorporó la misma-, habría contribuido al vicio y se estaría aprovechando de su propio dolo.

□A mayor abundamiento, de seguir la tesis de la contraria, se llegaría al absurdo de sostener que ni siquiera se encontraría autorizada para solicitar la nulidad absoluta de la referida cláusula, porque habría celebrado o ejecutado el Convenio Colectivo, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidada según dispone el artículo 1683 del Código Civil.

□Por lo demás, al tratarse de una cláusula completamente válida y que se encuentra produciendo todos sus efectos, formando parte de los contratos individuales de las trabajadoras, la única forma que podría modificarse dicha cláusula, es mediante el acuerdo del empleador y las organizaciones sindicales que lo hubieran suscrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 311 del Código del Trabajo y artículo 1545 del Código Civil, cuestión que no ha ocurrido.



DUODÉCIMO: Que, resuelto lo anterior, corresponde determinar si a las demandantes les resulta aplicable el referido beneficio indemnizatorio.

□ Como se indicó, el artículo 31 del Convenio Colectivo regula los requisitos necesarios para acceder a la indemnización convencional pactada, los que corresponden a los siguientes: (1) Que se produzca la jubilación por invalidez, edad legal o muerte del trabajador; (2) Que el contrato de trabajo hubiera estado vigente un año o más; y (3) Que los trabajadores se encuentran individualizados en el Anexo B, no existiendo ningún otro requisito para acceder al beneficio.

□ En la especie se cumplen dichos requisitos, ya que las tres trabajadoras se encuentran individualizadas en el Anexo B del Convenio Colectivo, su contrato de trabajo ha estado vigente hace más de un año y se encuentran jubiladas o han cumplido la edad legal para jubilarse. En efecto doña Elizabeth Calderón ingresó a trabajar a la empresa el 22 de mayo de 1995, a la fecha de presentación de la demanda tenía 63 años de edad y se encuentra jubilada por vejez en la compañía Penta Vida; doña Myrta Escobedo Valenzuela, comenzó a prestar servicios para la demandada el 1 de diciembre de 2004, a la fecha de presentación de la demanda tenía 60 años; y doña María Cristina Bórquez, presta servicios a la compañía desde el 1 de junio de 2005, a la fecha de presentación de la demanda tenía 68 años y se encuentra pensionada por vejez en Penta Vida.

□ Por tanto, se declarará que a las demandantes les asiste el derecho a obtener la indemnización convencional regulada en el artículo 31 del Convenio Colectivo al que se encuentran adscritas.

□ Sin embargo, para que dicho beneficio sea exigible, es necesario poner término a la relación laboral, lo que se desprende del tenor de la citada cláusula, al expresar que la indemnización se otorgará “*contra firma de finiquito amplio*” y el hecho de que se trata de una indemnización convencional por años de servicios, requiriéndose la separación del trabajador para acceder a la misma según lo establecen los artículos 163 y 172 del Código del Trabajo, esta última norma -incluso- se expresa en la disposición analizada.

□ En el mismo sentido declaró doña Erika Rivera, indicando que una vez que se aplica el beneficio, se firma un finiquito y se paga lo que corresponde, terminando la relación laboral.

□ Por tanto, en dicho punto, esta sentenciadora concuerda con las alegaciones de la demandada respecto de que es necesario que se ponga término a la relación laboral para acceder al beneficio indemnizatorio,



lo que no constituye un requisito de la indemnización en sí -como se ha señalado- sino que un presupuesto para efectos de materializarlo, y en definitiva exigirse a la empresa demandada.

□ Así, las únicas causales de terminación del contrato de trabajo que resultarían aplicables en la especie y concordantes con el tenor de dicha cláusula sería la renuncia voluntaria de las trabajadoras y el mutuo acuerdo entre las partes, fundado en que se jubilaron por vejez o cumplieron la edad legal para ello, accediendo a la indemnización convencional por años de servicios contenida en el artículo 31 del Convenio Colectivo, a la cual tienen derecho.

□ No pudiendo circunscribirse únicamente a la segunda causal, ya que, para suscribir el correspondiente acuerdo, se requeriría en un principio, la mera manifestación de voluntad del deudor, tratándose de una condición meramente potestativa lo que se encuentra prohibido en el artículo 1478 del Código Civil.

□ **DÉCIMO TERCERO:** Que, las demandantes solicitan que se condene a la demandada al monto de la indemnización que en concreto resultaría procedente al aplicar el artículo 31 del Convenio Colectivo, sin embargo, este Tribunal no puede acceder a dicha petición, dado que, conforme al tenor de la cláusula en comento, la misma se debe calcular conforme a lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, en este caso, debido a que las trabajadoras tenían una remuneración variable, según consta en sus liquidaciones de sus remuneraciones, conforme al promedio de las remuneraciones de los últimos tres meses íntegramente trabajados, y considerando todos los años de servicios o fracción superior a 6 meses que la trabajadora haya prestado continuamente a la empresa.

□ Liquidación que no es posible realizar en esta oportunidad, dado que el contrato aún no ha terminado, ya sea por renuncia o mutuo acuerdo de las partes, debiendo efectuarse el mismo una vez que se ponga término a la relación laboral por alguna de dichas causales, para efectos de considerar la remuneración mensual sobre la base que se calculará la indemnización y los años de servicios que en definitiva hayan prestado cada una de las trabajadoras a la fecha de su separación efectiva.

□ Por último, considerando que el artículo 31 del Convenio Colectivo, indica expresamente que, para efectos de la indemnización convencional por años de servicios, la última remuneración mensual se debe calcular de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo, norma que establece un monto máximo de la remuneración que se debe considerar, al expresar: *“Con todo, para los efectos de las indemnizaciones establecidas en este título, no se considerará una remuneración*



mensual superior a 90 unidades de fomento del último día del mes anterior al pago, limitándose a dicho monto la base de cálculo”.

□ Por lo anterior, al haberse establecido en la disposición colectiva que el cálculo de la remuneración del trabajador se debe realizar conforme a lo indicado en el artículo 172 del Código del Trabajo, norma que aplica el límite de 90 Unidades de Fomento a la última remuneración mensual, se acogerá la alegación de la demandada al respecto, y así se declarará en lo resolutivo.

□ **DÉCIMO CUARTO:** Que, el resto de la prueba rendida no contiene información que altere lo ya razonado. En efecto, las declaraciones efectuadas por los trabajadores absolviendo posiciones, dado que sólo reiteraron la información contenida en los escritos de discusión y los medios probatorios allegados al juicio, respecto de que mantienen una relación laboral vigente, sus funciones, no han presentado una renuncia ni se les ha comunicado la terminación del contrato de trabajo y que a los trabajadores administrativos se les aplica el Convenio Colectivo. Asimismo, los anexos de contratos de fecha 1 de diciembre de 2019 de doña María Cristina Bórquez, Anexos N°2, 3, 4, 5 y de 1 de julio de 2020 de doña Elizabeth Calderón; y 1 de julio de 2020 de doña Myrta Escobedo, dado que contienen una actualización de su sueldo bruto mensual y forma de cálculo de la remuneración variable en el caso de la segunda trabajadora, información que no resulta relevante para resolver la controversia de autos.

Por lo anteriormente expuesto, y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 10, 159, 160, 161 bis, 163, 163 bis, 172, 178, 303, 306, 311, 320, 321 N°2, 420, y siguientes, 456 y 459 del Código del Trabajo siguientes del Código del trabajo, y artículos 8, 1462, 1478, 1545, 1562, 1563 y 1683 del Código Civil, se resuelve:

- I. Que **SE RECHAZA** la excepción de falta de interés procesal deducida por **VIDA TRES S.A.**
- II. Que **SE ACOGE** la demanda interpuesta por doña **ELIZABETH CALDERÓN VALENZUELA**, doña **MYRTHA ESCOBEDO VALENZUELA**, y doña **MARÍA CRISTINA BÓRQUEZ VIAL**, en contra de su empleador, **VIDA TRES S.A.**, declarándose que tienen el derecho a percibir la indemnización convencional por años de servicios contenida en el artículo 31 del Contrato Colectivo de fecha 8 de mayo de 2020, celebrado entre Vida Tres S.A. y el Sindicato Interempresas de Isapre Vida Tres S.A., Banmédica S.A. y Otros, y en consecuencia, la demandada tiene la obligación de



pagarles aquella, al terminar la relación laboral y contra firma de amplio finiquito. Debiendo calcularse dicha indemnización en los términos expresados en el artículo 172 del Código del Trabajo, siendo aplicable al cálculo de las remuneraciones mensuales el límite de 90 Unidades de Fomento contenida en dicha disposición.

- III. Que no se condenará en costas a la demandada, por estimar que tenía motivo plausible para litigar.

☐ Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT : O-1720-2022

RUC : 22- 4-0391540-1

Pronunciada por doña PIA ALEJANDRA DROGHETTI FUENTES, Juez Interina del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl



A contar del 11 de septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>

